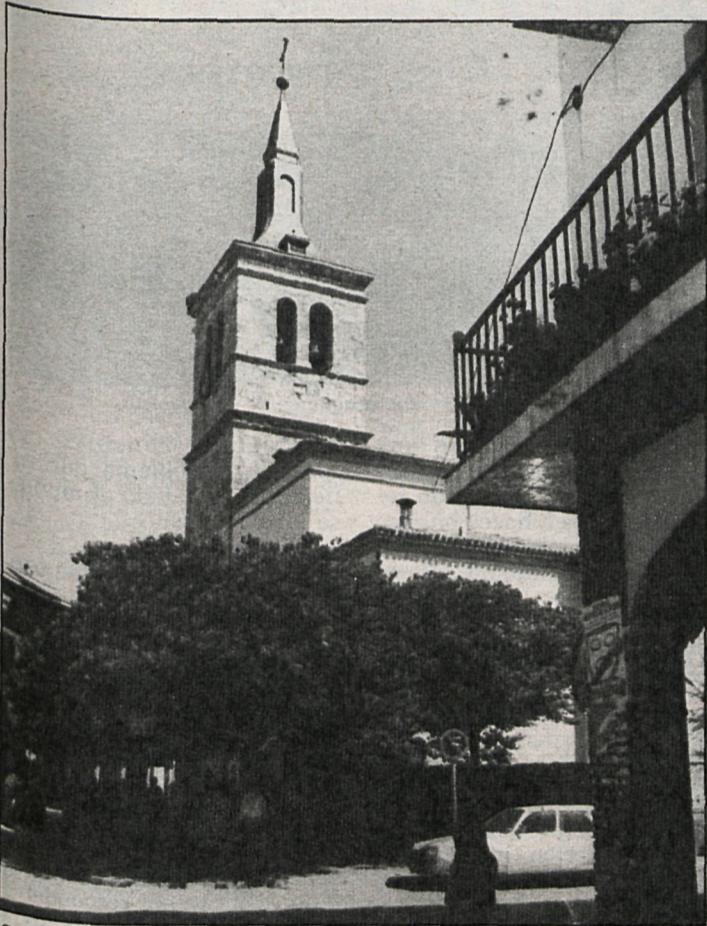


José de Cruz Frutos, elegido nuevo alcalde de Torrejón

«HAY QUE REESTRUCTURAR

EL GOBIERNO MUNICIPAL»

José de Cruz Frutos, natural de Madrid, donde nació hace cincuenta y dos años, es —según informamos en CISNEROS— el nuevo alcalde de Torrejón de Ardoz. Está casado y tiene tres hijos, de veintiocho, veinticuatro y dieciocho años de edad. Reside en Torrejón desde hace cinco años y antes de ser elegido concejal trabajaba como jefe administrativo en la empresa Romachelar, de Alcobendas. Desde que fuera elegido concejal por el PSOE ha llevado en el Ayuntamiento el área de Hacienda. Desde hace nueve meses ha desempeñado la responsabilidad de la Alcaldía en sustitución de Lope Chillón



Según José de Cruz, es preciso hacer un balance de la actuación municipal desarrollada hasta ahora en Torrejón

CISNEROS ha entrevistado al nuevo alcalde del madrileño municipio de Torrejón para conocer su postura ante algunos de los problemas de la vida municipal.

La elección —señala— no me ha causado ninguna alegría personal, porque no he buscado este cargo. He venido a la política por unas ideas muy profundas que he manifestado a lo largo de mi vida en asociaciones de vecinos, sindicatos, etc. Pienso que las personas no deben subir los escalones ellas mismas, sino que son los demás los que las tienen que empujar.

PROGRAMA DE ACTUACION

—¿Habrà Junta de gobierno y programa de actuación municipal?

—Hay que hacer una reestructuración, aunque no es cierto que haya vacío de poder. No obstante, tener una Junta de gobierno es necesario y bueno, se trabaja mejor porque se conocen mejor los problemas de las grandes áreas. En cuanto al programa de actuación, tendremos que explicar los proyectos que quedan por hacer dentro de nuestro mandato. Las líneas de actuación las tenemos marcadas. Tenemos que cumplir los programas electorales, que en honor de la



SERVICIO DOCUMENTACION

José de Cruz, alcalde de Torrejón

verdad ya están cumplidos casi en su totalidad.

—¿Va a ser usted un alcalde presidencialista?

«No es cierto, sin embargo, que haya vacío de poder»
«Tener una Junta de gobierno es bueno, porque se conocen mejor los problemas de las grandes áreas»

—De alcalde presidencialista nada. El gobierno municipal debe estar en manos de todos. Los delegados de área han tenido y tienen competencias, aunque algunos de los planteamientos de los responsables de

área no se hayan podido realizar por falta de dinero.

—¿Cómo han funcionado los pactos municipales?

—Al principio hubo roces, fundamentalmente con Lope Chillón. Pero desde entonces ha sido el Ayuntamiento que menos problemas ha tenido entre PSOE-PCE. Por lo tanto, puedo decir que el pacto ha funcionado, por lo menos desde que yo estoy de alcalde no ha habido problemas serios.

—¿Cómo ve el resultado de las próximas elecciones municipales?

—Pienso que dependerá del resultado de las elecciones legislativas. Lo que está claro es que la izquierda continuará gobernando el Ayuntamiento. La gente sabe que se han hecho muchas cosas. Para hacerlo mejor, los que entren tendrán que trabajar muy fino.

—La Administración debía canjearlo por otro comestible—

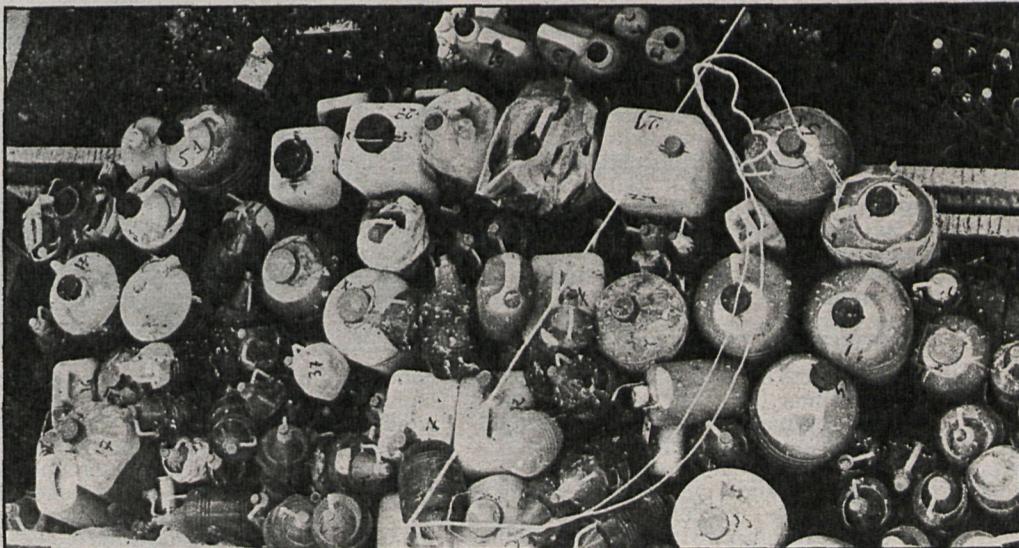
NADIE RECOGE EL ACEITE DE COLZA DE MEJORADA

Decenas de litros permanecen almacenados desde hace meses en las dependencias municipales

En el Ayuntamiento de Mejorada del Campo se encuentra almacenada una considerable cantidad de aceite de colza —parte de la cual vemos en la fotografía— recogido por la Corporación y que todavía no ha podido ser canjeado por aceite comestible.

El alcalde de la localidad, Eustaquio Baeza, del PCE, recibió telegramas del Ministerio de Sanidad para que el Ayuntamiento interviniese las marcas de aceite que contenían el veneno. El Ayuntamiento procedió a requisar el producto, esperando que el canje se produjese en un plazo de tiempo lo más breve posible. Esto no ha sido así, y el alcalde manifiesta

su preocupación por el trastorno que supone para las economías modestas no disponer de aceite comestible a cambio del que les fue requisado. Los vecinos se preguntan qué pasa con el aceite. La insensibilidad de la Administración Central, dice Eustaquio Baeza, queda de manifiesto en esta actuación. «Ni el Ministerio de Trabajo ni el de Sanidad comprenden la situación económica real de estos pueblos. Mejorada tiene 610 parados de una población de 10.000 habitantes.» «La devolución del aceite —continúa diciendo el alcalde de Mejorada— debe hacerse lo antes posible, porque hay familias que no pueden comprar otro.»



Estas son algunas de las garrafas de aceite venenoso que actualmente se encuentran en Mejorada a la espera de que la Administración efectúe el canje

SERVICIO DOCUMENTACION

ASUNCION ABAD

Darío Fernández, representante de los afectados por la presunta estafa inmobiliaria

«LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS NO QUIERE SABER NADA DE PROMOCISA»

«Se limita a decir que no tiene competencias suficientes para adoptar alguna medida respecto a las compañías aseguradoras»

El «caso» Promocisa, en el que se han visto afectados casi tres mil compradores de viviendas que a finales de 1979 se encontraron con las obras paralizadas, sin que nadie respondiera del dinero que habían entregado previamente, sigue sin solución. Actualmente, tras el encierro protagonizado por algunas de las «víctimas», la situación es de espera, mientras siguen su curso las querellas presentadas. Ello no impide que muchos compradores pasen por unos momentos realmente angustiosos

Para Darío Hernández, representante de los afectados, la situación actual «es una total irresponsabilidad política de la Dirección General de Seguros: no quieren saber nada del asunto, alegando que no tienen competencias suficientes». Hace tres años que está paralizada en las Cortes una nueva ley de seguros, con lo que la DGS ampliaría sus competencias para poder sancionar a las compañías que no cumplen sus compromisos económicos. Con la actual legislación, hasta que no haya sentencia judicial no puede intervenir en las compañías aseguradoras implicadas. La situación de muchos socios es casi desesperada, ya que «por la vía negociada se ha intentado todo, y no hay solución a la vista, y por la vía judicial el proceso es muy lento, con lo que el patrimonio merma considerablemente y tampoco estamos seguros que sean juzgados todos los implicados en el escándalo».

El colectivo de afectados por la presunta estafa de la empresa Promocisa, lo forma un total de 2.915 compradores de viviendas, que a finales de 1979 se encontraron con las obras paralizadas y los bloques a medio construir, sin que la empresa pudiera responder del dinero recibido como pago de las viviendas. Varios informes elaborados por la administración aseguran que en la gestión del dinero recibido no ha habido irregularidades, y sólo se trata de dificultades de liquidez.

Como las obras siguen paralizadas en el verano de 1981, los afectados presentaron un total de 1.500 demandas contra los bancos, los promotores y las compañías aseguradoras.

El ministro de Obras Públicas, en respuesta a dos interpelaciones parlamentarias, presentadas por el grupo comunista en diciembre pasado, y por el grupo socialista a finales de febrero, no asu-



El Parque de La Coruña, de Villalba, es una de las urbanizaciones de Promocisa

me las responsabilidades que los afectados le imputan, en concreto a la Dirección General de Seguros, ya que es la única que tiene competencias sobre el tema, e incluso cuen-

ta con participación en una de las compañías de seguros afectadas, y se ha negado repetidas veces a hacer público el informe elaborado cuando estalló el escándalo. Darío

Hernández, concluye, el «principal problema que tenemos es que todo el mundo se lava las manos».

Azucena CRIADO

CRISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA CRISIS

¿Otra vez a vueltas con la crisis? ¿Es que no está clarísimo que lo que hace falta son más centros de salud, más bibliotecas y más polideportivos... y punto final? Muy al contrario de lo que pueda parecer, la exigencia de cambios en la organización y la gestión de los equipamientos y la puesta en cuestión de muchos de ellos no puede considerarse como un aspecto residual. El objetivo de estas líneas es señalar cómo, aun dentro del marco limitadamente reformista en que se sitúan las reivindicaciones sobre los procesos de consumo, el aumento simplemente cuantitativo de los equipamientos, siendo necesario, resuelve escasos problemas e incluso puede empeorar la gravedad de algunos.

La palabra «equipamiento» se ha generalizado como denominador común que designa los soportes materiales de una serie de procesos sociales de consumo (educación y cultura, sanidad, deporte y esparcimiento) sobre los que existe una fuerte sensibilidad popular, que no es sino el resultado de la conciencia de su importancia como condicionantes del nivel de vida urbano.

La crisis económica hace más necesario, si cabe, elevar estas dotaciones sociales, que conviene recordar no han sido concedidas gratuitamente por el «estado de bienestar», sino que han sido producto de largas luchas (por la escolarización obligatoria, por los seguros de enfermedad, etc.). El descenso del poder adquisitivo y el incremento del paro y de la economía «golf» o «subterránea» impide que muchos servicios sean comprados a precios de mercado y aumenta la población dependiente y al margen de los servicios sociales mínimos.

PERSPECTIVA DE DERECHA

La política al respecto de los gobiernos de derecha parece clara. En primer lugar hay que dedicarse al rearme y a los sectores básicos que permitan rentabilizar los más saneados negocios del capital. Luego, si queda algo, se dedica a sanidad, enseñanza, etc. Pero lo más importante es entender que el problema no es sólo de cantidad de dinero. La política de la derecha parece que se podría resumir en dos líneas de actuación además de lo anteriormente mencionado:

1. Rentabilizar aquellos servicios que pueden en-



contrar un mercado solvente (por ejemplo libre elección de médico y pago por acto médico), provocando simultáneamente el caos de determinados servicios para empujar hacia lo privado-mercantilizado a estos sectores de población y manteniendo «socializadas» las pérdidas del costoso aparato conjunto.

2. Ofrecer unos servicios que reproduzcan al máximo la ideología y las diferencias de clase existentes (subvención a la enseñanza privada religiosa que impone el ideario de centro).

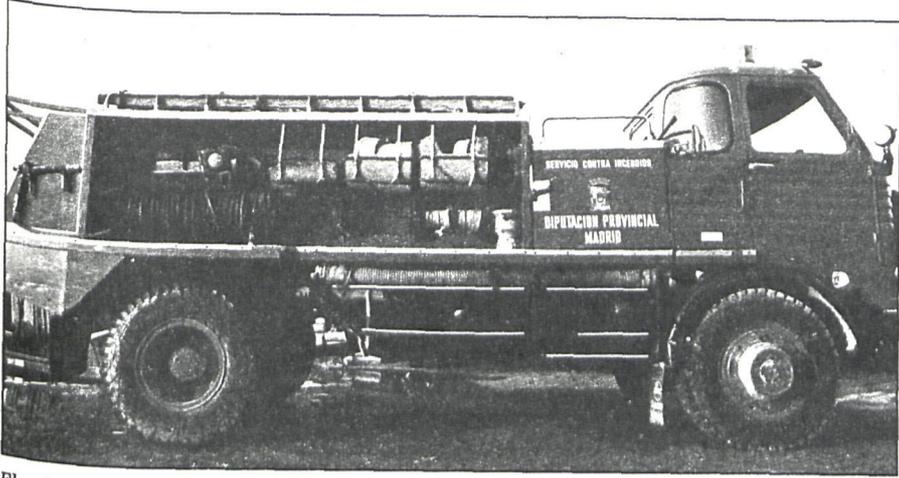
PERSPECTIVA DE IZQUIERDA

En consecuencia, la planificación de los equipamientos desde una perspectiva de izquierda debe asumir esta situación contradictoria. Respecto a la restricción de inversiones y los intentos de rentabilización, mediante los que el capital busca producir una disminución del nivel de vida y rebajar el valor de la fuerza de trabajo, no es suficiente responder con la demanda de incrementar los servicios. Se trata además de promocionar un tipo de equipamientos cuyo valor de uso sea el más útil a aquellas capas sociales más golpeadas por la crisis.

Pero además hay que pensar que muchas de las formas históricamente consideradas como válidas deben ser puestas en entredicho: bien porque responden a un criterio desarrollista hoy inaceptable (grandes hospitales o super-centros culturales), bien porque están inspiradas por criterios ideológicos, organizativos o de segregación social inaceptables o despilfarradores (residencias de ancianos que son fábricas de crónicos, instalaciones deportivas de alto rendimiento pensadas para producir máquinas-ídolo de hacer deporte). Hay que reexaminar el valor de uso real (no mítico-propagandístico) de cada tipo de equipamiento en relación con cada tipo de demanda, según distintas edades, culturas y clases sociales. Se trata además de dar prioridad a las demandas menos solventes y favorecer el acceso a las actividades menos formalizadas, preferentemente gestionadas por los usuarios, no competitivas, de escaso impacto espacial y que generen un mínimo de necesidades de transporte y un máximo de relación social.

En ocasiones basta con observar cómo la gente usa el espacio público, la calle o los polideportivos para ver las ventajas o la inutilidad de determinados servicios. En otras ocasiones hay que reconocer que se trata de una vieja pelea contra la ideología que supone que la extensión del bienestar social se efectúa en base a la asimilación del comportamiento de consumo de las clases dominantes o el estilo de vida americano o centroeuropeo (césped delante de la casa, golf e hipermercado).

Ignacio DUQUE
Sociólogo-urbanista



El número de vehículos que componen la flota de los parques dependientes de la Diputación es de 60, de los que 41 son autobombas

El personal actual, tanto en la capital como en la provincia, resulta completamente insuficiente

La plantilla actual es de mil doscientos

LA PROVINCIA DE MADRID NECESITA 4000 BOMBEROS

La sección de lucha contra incendios de la Diputación madrileña, desde su creación en 1967, ha ido aumentando sus efectivos ininterrumpidamente sin que, aun así, se cuente hoy con un servicio adecuado para toda la región. Según sus responsables, para alcanzar un nivel europeo adecuado haría falta una inversión de 3.000 millones de pesetas y contar con una plantilla de 3.000 hombres —actualmente 370—; lo que en las circunstancias actuales es prácticamente imposible de conseguir. En Madrid capital hay 900 bomberos, y la cifra ideal sería 1.500.

El servicio, que tenía en sus orígenes como función primordial la extinción de incendios forestales, ha tenido que desdoblarse y hacer frente tanto a los incendios en los bosques como a los siniestros en fábricas y edificios de viviendas de los pueblos que rodean la capital, sobre todo en un radio de unos treinta kilómetros, donde la edificación ha sido muy intensa durante los últimos años.

Estos pueblos, a causa de un crecimiento desmedido, no cuentan —en la mayoría de los casos— con un servicio de bomberos adecuado, y tienen que depender de los vehículos regionales, que en muchos casos tardan bastante tiempo en llegar al lugar del incendio porque están prestando servicios en otras localidades.

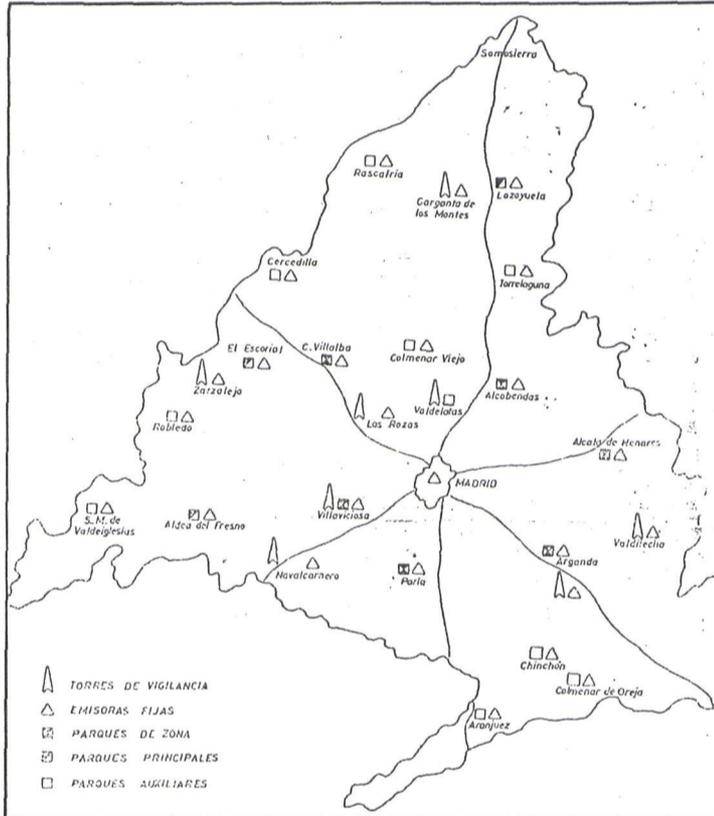
La región madrileña tiene en la actualidad 15 pueblos, con más de 20.000 habitantes, que deben tener su propio parque de bomberos; pero, en todo caso, la Diputación es subsidiaria y última responsable. Según técnicos del servicio de incendios de estos grandes pueblos, sólo el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene recursos para sostener el parque de bomberos debido al impuesto municipal, que obliga a cada contribuyente a pagar 500 pesetas al año para mantenerlo. «Al resto de grandes municipi-

pios les va a costar bastante resolver estos problemas —dicen los responsables del servicio provincial— y los pueblos pequeños quieren que les den todo hecho, no encontrando, por su parte, la colaboración necesaria.» El primer paso de esta colaboración sería la cesión municipal de los terrenos donde instalar el parque de bomberos, y que el mantenimiento del mismo, una vez en funcionamiento, correrá a cargo del Ayuntamiento.

La Corporación de Móstoles ha aprobado, en sus presupuestos de 1982, la construcción de un nuevo parque de bomberos, por valor de 30 millones de pesetas, y con el equipamiento necesario para una dotación de 40 hombres, con lo que quedarán resueltos, en gran medida, los problemas de tiempo a la hora de acudir a un siniestro, liberando algo las cargas del servicio provincial.

EL DINERO DE ESTE AÑO

El presupuesto de 1981 para el Servicio de Incendios de la Diputación fue de 64 millones de pesetas. Este año, los encargados del Servicio solicitaron 470 millones de pesetas, que se han visto reducidos a 70, «como gran favor —dicen— y con cargo a los presupuestos generales». Esta falta de dinero im-



El gráfico señala la ubicación de las distintas instalaciones pertenecientes al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Corporación Provincial

pide acometer muchos de los proyectos que había para mejorar el parque provincial de bomberos.

En la actualidad, la Diputación Provincial cuenta con seis parques de zona y tres principales. Estos parques están atendidos por bomberos profesionales, y en funcionamiento las veinticuatro horas del día. La infraestructura del servicio contra incendios se comple-

menta con otros 10 parques auxiliares repartidos por otros tantos pueblos de la región, que están destinados principalmente a la extinción de fuegos forestales y agrícolas, y en determinados casos pueden prestar apoyo a los parques de zona y principales. Estos parques auxiliares están atendidos por personal forestal, bomberos voluntarios y colaboradores de los ayuntamientos.

Trescientas setenta personas en total atienden los parques y el material, entre los que se incluyen ingenieros de servicio, oficiales, conductores de vehículos y bomberos. El número de vehículos que componen la flota de todos los parques dependientes de la Diputación asciende a 60, de los que 41 son autobombas, que en determinadas épocas del año resultan insuficientes. Otras 10 motobombas portátiles están repartidas entre 15 pueblos distintos de la región, que no cuentan con otro servicio permanente para la extinción de incendios.

Además, la Diputación cuenta con una red de instalaciones preventivas o de aviso para controlar y localizar los incendios en el menor tiempo posible. Dentro de este servicio, tiene ocho torres de vigilancia en distintos pueblos, 26 emisoras fijas, 57 móviles y 36 portátiles, también repartidas por toda la provincia.

El número total de actuaciones del Servicio aumentó de 1980 a 1981 un 60 por 100, con 3.169 salidas en 1981. Entre los servicios prestados destacan también las 291 salidas a causa de inundaciones, y 196 por problemas de alcantarillado.

En Madrid capital los problemas del servicio son prácticamente los mismos que en la región. Hace falta modernizar el servicio y cambiar, periódicamente, el material que se queda anticuado. La plantilla es de 900 hombres, y la cifra que se estima como ideal sube hasta 1.500 bomberos.

F. GARCIA, E. LOPEZ, A. JUSTE

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

La Corporación de este Ayuntamiento, en sesión de 9 de febrero de 1982, adoptó acuerdo de convocar concurso-subasta para ejecución de las obras que a continuación se relacionan por separado:

- 1.ª Construcción de una piscina pública para adultos, otra piscina infantil y vestuarios.
 - Tipo de licitación: 13.475.345 pesetas.
 - Plazo de ejecución: Tres meses.
 - Fianza provisional: 585.409 pesetas.
- 2.ª Renovación de tuberías de la red de distribución de aguas.
 - Tipo de licitación: 19.513.645 pesetas.
 - Plazo de ejecución: Doce meses.
 - Fianza provisional: 585.409 pesetas.
- 3.ª Ampliación del abastecimiento de agua y depósito regulador.

- Tipo de licitación: 25.166.382 pesetas
- Plazo de ejecución: Seis meses.
- Fianza provisional: 754.991 pesetas.

Conforme a los anuncios aparecidos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» de fecha 10 de marzo de 1982 y «Boletín Oficial del Estado» de fecha 26 de marzo de 1982, las proposiciones, contenidas en dos sobres cerrados, podrán presentarse en las oficinas municipales desde las 10 a las 14 horas, con los requisitos que establecen los pliegos de condiciones, hasta el día 21 de abril próximo.

En la Secretaría Municipal podrá consultarse el expediente y proyectos de las referidas obras.

Moralzarzal, a 27 de marzo de 1982.— El alcalde, **Jesús González Domínguez**; el secretario, **Jesús Pradera Bravo**.

AYUNTAMIENTO DE ALCORCON ANUNCIO

Contratación, por el período de un año, de un arquitecto (título superior). Las características de la plaza serán:

- Estar en posesión del título oficial correspondiente.
- Conocimientos de la presente revisión del Plan General del Area de Madrid.
- Formación y experiencia en planeamiento y diseño urbano.
- Conocimiento y práctica de la legislación del suelo.
- Contratación administrativa según el artículo 25.1 del R. D. 3046/77.
- Retribuciones: las reglamentarias.
- Selección: mediante datos del «curriculum vitae» y entrevista personal.

La presentación de solicitudes se podrá realizar hasta el día 23 de abril de los corrientes y dirigidas al señor alcalde-presidente de la Corporación, acompañadas del «curriculum vitae» y cualquier documento que se considere necesario, así como fotocopia del título correspondiente.

Alcorcón, 22 de marzo 1982.— El alcalde-presidente.

Esta es la realidad de Madrid



Un símbolo para nuestra gente

DIPUTACION DE MADRID - CAMPAÑAS POR LA AUTONOMIA